



INICIATIVA PARA LOS DERECHOS Y RECURSOS | OCTUBRE 2020

*Proliferan leyes y reglamentos perjudiciales durante la
crisis del COVID-19
Sur y sudeste de Asia*

Asia Indigenous Peoples Pact

Indonesia Tenure Coalition

Rights and Resources Initiative

Índice

Agradecimientos.....	3
Introducción.....	3
Contexto de los derechos humanos durante el COVID-19: Cierre de espacios democráticos	5
Parte 1: Procesos legislativos polémicos	6
Parte 2: Estímulo y compensación empresarial.....	9
Parte 3: “Soluciones” pandémicas que desvirtúan los derechos de los PI y de las CL.....	12
Conclusión.....	14

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a los abogados que generosamente contribuyeron con su tiempo y conocimientos a este informe: Asep Y Firdaus, Experto Legal y Director del Instituto Epistema; Andiko, SH. MH, abogado indonesio especializado en sostenibilidad; Shomona Khanna, abogado de la Corte Suprema de la India; Antonio G. M. La Viña y Joy Reyes, Observatorio de Manila.

También agradecemos a los traductores que ayudaron a poner este informe a disposición de los hablantes de los idiomas filipino, bahasa indonesio, hindi, francés y español: Jo Ann Guillao; Septiari Ayu; Hridayesh Joshi; Dhruva Narayan; Samuel Tribollet; y Pauline Kulstad.

Introducción

El planeta se enfrenta a una crisis de salud mundial sin precedentes como resultado del COVID-19. Al 29 de septiembre, [más de 1 millón](#) de personas habían muerto a causa del virus. Resulta cada vez más probable que la pandemia se prolongue a medida que la crisis sanitaria inicial se transforme en crisis agudas tanto de [seguridad alimentaria](#) como económica.

Entre algunos de los grupos más vulnerables al COVID-19 se encuentran los pueblos indígenas (PI) y las comunidades locales (CL), quienes ya se enfrentan a desigualdades arraigadas, estigma y discriminación. El acceso inadecuado a servicios básicos de atención de la salud, instalaciones sanitarias y acceso limitado a Internet para las plataformas de educación en línea, son algunos de los [problemas estructurales que afectan la capacidad de las comunidades](#) de lidiar con la pandemia. Sin embargo, cuando las comunidades disfrutaban de su derecho a la autodeterminación, han demostrado su tenacidad en la creación de respuestas a las crisis — incluso al COVID-19—, esfuerzos que ellas mismas dirigen y que resultan apropiados desde el punto de vista cultural.

La base del éxito de las respuestas a la actual crisis son [la seguridad de los derechos de tenencia](#), los ecosistemas saludables y productivos y el respeto a la facultad de una comunidad de permanecer en aislamiento voluntario al suspender todos los proyectos que requieran de su consentimiento libre, previo e informado (CLPI) durante el transcurso de la pandemia.

[Los PI y las CL manejan de manera consuetudinaria más del 50% de la superficie terrestre del planeta](#), pero sólo el 10% de dicha área se encuentra bajo un régimen de tenencia seguro que garantice sus derechos tradicionales de propiedad.¹ Tal inseguridad en la tenencia restringe el poder de los PI y de las CL para implementar estrategias efectivas, tales como el aislamiento voluntario, que prevengan la propagación de los patógenos virulentos.² Además, sin tenencia

¹ Los actores estatales y no estatales reconocen ampliamente que la seguridad de los derechos colectivos sobre la tierra y los recursos contribuye al avance de los [objetivos sociales, económicos y ambientales](#) definidos a nivel internacional. En la práctica, los órganos legislativos nacionales han tardado en formalizar los regímenes de tenencia que apoyan a las comunidades y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres rurales.

² Las aldeas tribales en Bengala Occidental, en la India, han producido una respuesta proactiva al COVID-19 al decretar [sus propios cierres y al aislar voluntariamente a trabajadores migrantes](#) que regresan de espacios urbanos.

segura, los territorios de las comunidades corren el riesgo de ser explotados por sus ricas reservas de recursos naturales, ya que los gobiernos buscan amortiguar la inminente recesión económica mundial al expandir las actividades de extracción. Finalmente, la pandemia ha llevado a un menor cumplimiento de las leyes vigentes sobre los derechos a la tierra, al aumento del acaparamiento de tierras y a la criminalización de los PI y las CL que luchan por sus derechos fundamentales sobre los sistemas socio ecológicos que administran.³ Por lo tanto, más allá de sus implicaciones para la salud pública, el COVID-19 es un "multiplicador de amenazas" en las tierras sin tenencia segura.

La reciente publicación de la quinta Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica por parte de la Secretaría del CDB encontró que los gobiernos no cumplieron las Metas de Aichi para la Biodiversidad y que sólo seis de ellas se alcanzaron parcialmente en la última década.⁴ La crisis económica mundial y las "mismas soluciones de siempre" han puesto en peligro la próxima década de objetivos ambientales aun antes de ser ratificados formalmente. Buscar el desarrollo económico a expensas de la justicia social y ambiental desvirtúa los modos de vida de los PI y de las CL, así como el bienestar y la salud de todas las personas que habitamos el planeta. Para salir de esta pandemia con sociedades más equitativas y sostenibles, necesitamos un cambio inclusivo y transformador que repare injusticias fundamentales como, por ejemplo, la inseguridad de la tenencia, la marginación política y la discriminación social de las comunidades que manejan más de la mitad de las tierras.

Este informe analiza los desarrollos legislativos durante el COVID-19 en la India, Indonesia y Filipinas que han socavado las interacciones sostenibles entre humanos y el medio ambiente y el pleno [disfrute de los derechos sobre territorios consuetudinarios](#) por parte de los PI y de las CL. Aunque la India, Indonesia y Filipinas no han ratificado todavía el Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, publicado en 1989 por la OIT, ya ratificaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Asimismo, cada uno de esos países ha promovido reformas de tenencia de tierras y bosques a nivel nacional, aunque su implementación ha sido débil.⁵

En este informe presentaremos primero el contexto donde ocurre el COVID-19 en los países estudiados. Se examinarán los procesos legislativos que surgen como respuesta a la pandemia en cada país, incluidos los cierres ordenados por los Estados y que proporcionan un contexto

³ Asia Indigenous Peoples Pact [Pacto de los pueblos indígenas de Asia]. (2020). *Submission by Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) and its member organizations and networks in partial response to the 'Call for inputs Report' of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples to the General Assembly — Impact of COVID-19 on Indigenous Peoples in Asia*. Disponible en https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_AIPP_UNSRIP-June2020.pdf

⁴ Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica. (2020). *Global Biodiversity Outlook 5. Montreal*. Disponible en <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf>

⁵ Rights and Resources Initiative. (2018). *At a Crossroads: Consequential Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002-2017*. Disponible en RRI, Washington D.C.: https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2019/03/At-A-Crossroads_RRI_Nov-2018.pdf; Kumar, K., Singh, N. M., & Rao y. G. (2017). Promise and Performance of the Forest Rights Act. *Economic & Political Weekly*, 52(25-26).

importante. Posteriormente, resumiremos los desarrollos legislativos bajo tres temas, que en ocasiones se superponen:

1. Avances oportunistas en procesos legislativos, considerados polémicos antes del COVID.
2. Estímulo y compensación empresarial.
3. Soluciones pandémicas verticales (de arriba hacia abajo) que desvirtúan los derechos de los PI y de las CL.

Encontramos que en la India, Filipinas e Indonesia, las iniciativas gubernamentales continúan con las agendas de desarrollo previas al COVID, hecho que aumenta la probabilidad de que las enfermedades transmitidas por vectores, como el COVID-19, proliferen y entren en huéspedes humanos.⁶ Dichas actividades han debilitado las agendas globales sobre el cambio climático y el colapso de la biodiversidad y la afectación continuará si se descartan las respuestas a la pandemia enfocadas a las personas y en su lugar se promueven líneas de acción destructivas para el medio ambiente.

Contexto de los derechos humanos durante el COVID-19: Cierre de espacios democráticos

Aunque el confinamiento constituye un componente estratégico importante de las respuestas destinadas a minimizar la propagación de patógenos virulentos, las autoridades también los utilizan para evitar la movilización pública.

Filipinas es un ejemplo extremo de cómo se han utilizado el cierre y la declaración de estado de emergencia nacional para aumentar la represión como parte de una respuesta altamente militarizada al COVID-19. El 24 de marzo de 2020, el presidente Duterte consolidó sus poderes ejecutivos mediante la Ley de la República Núm. 11469 (Ley Bayanihan), la cual delega poder legislativo al presidente durante una emergencia nacional. De esa manera, Duterte puede apropiarse ahora de fondos de otros poderes gubernamentales para financiar paquetes de estímulo y proyectos de desarrollo. Una ley posterior, la Ley de la República Núm. 11332, creó lineamientos para la *Enhanced Community Quarantine* (ECQ) [Cuarentena Comunitaria Mejorada], que se encuentra en curso. Las dos leyes se han utilizado en conjunto para impulsar la agenda de desarrollo de Duterte al tiempo de desalentar la organización pública y violar aún más los derechos civiles, políticos y socioeconómicos del pueblo.

⁶Las enfermedades zoonóticas son comunes y su proliferación se ha relacionado por mucho tiempo con la agricultura industrial, el comercio de animales silvestres, la deforestación y la degradación ambiental. Esas dinámicas crean el ambiente ideal para que los patógenos proliferen y muten rápidamente entre reservorios de especies que de otra manera no entrarían en contacto cercano con grandes poblaciones humanas. Existe una interconexión entre el COVID-19, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las actividades económicas que contribuyen a la degradación ambiental.

El 1º de abril, el [presidente Duterte implementó la política de "disparar a matar" en las fuerzas de seguridad](#) para controlar las "turbas" que protestaban contra la ECQ. En los primeros 20 días de la ECQ, más de 17 mil personas fueron arrestadas por violar el toque de queda y las medidas de cierre. [La ECQ ha afectado severamente a los PI y las CL](#) al impedirles el acceso a recursos naturales esenciales, a sus actividades económicas y tierras y a otras comunidades que requieren asistencia. Por ejemplo, el 6 de abril, alrededor de 100 policías dispersaron violentamente una barricada de Tawali-Ifugao erigida para detener las operaciones de explotación de la minera OceanaGold. Varios líderes indígenas fueron acusados de violar la ECQ. La Ley Bayanihan expiró el 5 de junio y el 11 de septiembre [el presidente Duterte promulgó la Ley Bayanihan 2](#), ampliando así sus [facultades especiales](#) hasta el 19 de diciembre. Con ello, se creó un fondo de US \$34 millones para enfrentar la crisis de salud, con énfasis en la reactivación de la economía.

De igual forma, se han encontrado ejemplos de criminalización y desplazamiento en **Indonesia** y la **India**. Durante la pandemia se han registrado 37 nuevos conflictos agrarios, 39 arrestos de agricultores, personas indígenas y pescadores y 2 muertes en conflictos agrarios (datos provenientes de KPA). Indonesia sigue siendo testigo de [acaparamiento de tierras de agricultores, desalojos forzados y reasentamientos comunitarios](#) fuera de sus zonas de residencia, a pesar de que el país enfrenta una crisis sanitaria y alimentaria y una recesión económica debido a la pandemia.

En la **India**, en marzo, una repentina declaración de cierre, dejó a [millones de trabajadores migrantes](#) varados en espacios urbanos y obligados a caminar cientos de kilómetros para llegar a sus hogares en medio del hambre, la represión policial y la muerte. Sin embargo, no se aplicaron restricciones de movimiento al sector minero, el cual se ha declarado [esencial](#) y las prácticas de forestación compensatoria continuaron con la deforestación y la subsiguiente reforestación de las tierras reclamadas y utilizadas por los PI y las CL.⁷ En los últimos meses, se ha registrado una [serie de casos de desplazamiento](#) destinados, entre otros, para un [embalse](#) y para iniciativas de [conservación](#).⁸ Mientras tanto, la intimidación de activistas ha ido en aumento; por ejemplo, el 8 de julio, la sección en la India de *Fridays for Future*, un movimiento global de huelga climática liderado por jóvenes, fue notificada de que no cumplía con la [Unlawful Activities \(Prevention\) Act \(UAPA\)](#) [Ley de (Prevención de) Actividades Ilegales] y posteriormente su sitio web fue bloqueado. Debido a la indignación pública resultado de tildar de "terroristas" a jóvenes ambientalistas, la policía de Delhi retiró la notificación, alegando que se debía a [un error administrativo](#). La UAPA es una ley sobre terrorismo y se utilizó contra *Fridays for Futures* debido a su campaña contra el nuevo borrador de la EIA de 2020 (véase la Parte 1, a continuación). En la notificación, la policía de Delhi calificó a *Fridays for Futures* de perturbadores de "[la paz \[y\] soberanía de la India](#)".

Parte 1: Procesos legislativos polémicos

⁷ La práctica de calificar a la minería como servicio "esencial" se ha observado en otros países, como Sudáfrica, Perú, Canadá y Guyana, entre otros.

⁸ En Kaimur, Bihar, se prevé que [50 mil personas de 108 aldeas](#) serán desplazadas para crear una reserva de tigres.

Antes de la crisis del COVID-19, los tres países implementaban agendas de desarrollo neoliberales que favorecían a los intereses de las élites transnacionales y locales al desvirtuar la integridad ecológica de los paisajes comunitarios. En los meses previos a la pandemia, muchas de esas leyes fueron objeto de feroz resistencia, misma que se ha buscado eliminar con la moratoria de reuniones públicas.

En **Indonesia**, el gobierno del presidente Joko Widodo utiliza al COVID-19 para promover procesos legislativos controvertidos ampliamente criticados antes de la pandemia. Grandes sectores de la sociedad civil consideran que con ello debilita las protecciones ambientales existentes y permite que las empresas acumulen tierras y desvirtúen la integridad de las comunidades indígenas Adat y de las comunidades locales de Indonesia que practican la gestión tradicional sostenible de los recursos.

- **Ley Ómnibus para facilitar la concesión de licencias comerciales.** La *Workplace Creation Law* [Ley de Creación de Lugares de Trabajo], conocida como la Ley Ómnibus, fue aprobada el 5 de octubre, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones campesinas y ambientales, de los PI, sindicatos y de movimientos estudiantiles. Es una colección de amplias reformas que desregulan los negocios mediante más de [1000 enmiendas en unas 79 leyes](#). La Ley Ómnibus desregula la minería, disminuye las sanciones por violaciones ambientales, elimina los requisitos para las EIA, crea condiciones favorables para la corrupción y excluye a los PI y a las CL de los procesos de toma de decisiones. Las enmiendas de la Ley Ómnibus [contradicen a las leyes de descentralización de Indonesia](#) y muy probablemente generarán una batalla judicial. Desde la ratificación del proyecto de ley han circulado [distintas versiones](#), cada una con importantes diferencias, situación que ha llevado a una falta de claridad en cuanto al lenguaje final de la Ley Ómnibus. Un cambio importante es la ampliación de la prohibición de las prácticas tradicionales de subsistencia que utilizan el fuego para despejar tierras agrícolas y que, al mismo tiempo, [dificultan el castigo a las plantaciones que utilizan el fuego para talar bosques](#). Asimismo, se sabe que [doce políticos](#), que desempeñaron un papel fundamental en la aprobación de la ley, tienen vínculos con el sector minero. En las primeras dos semanas de protestas, más de [6000 personas](#) fueron arrestadas. La ola de manifestaciones producida por esa nueva ley se ve amenazada por la *Health Quarantine Law* [Ley de Cuarentena Sanitaria], que hasta el momento no se ha aplicado.
- **Acaparamiento de tierras mediante la compra de propiedades con fines de especulación.** El reglamento de Ley Ómnibus, conocido como el Reglamento Presidencial (Perpres) Núm. 66 2020 sobre la Adquisición de Tierras para Proyectos de Desarrollo de Interés Público, que se [firmó y promulgó el 19 de mayo de 2020](#), reintrodujo disposiciones de un controvertido proyecto de ley de tierras relacionado con la compra de propiedades con fines de especulación. Su aparición acelerará drásticamente el acaparamiento de tierras en los territorios de los PI y de las CL y pondrá en peligro grandes extensiones de paisajes forestales intactos y territorios habitados por los PI y las CL.
- **El reconocimiento de los bosques consuetudinarios avanza lentamente.** El Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura emitió en 2020 el nuevo Reglamento Núm. 17 sobre los Bosques Consuetudinarios, que prolonga los procedimientos de reconocimiento y

protección de tales bosques. Las solicitudes pendientes para el reconocimiento de bosques consuetudinarios presentadas por los PI, junto con sus mapas territoriales, abarcan 6 millones de hectáreas. La promulgación de ese nuevo reglamento ministerial conlleva la posibilidad de complicar aún más el reconocimiento y la protección de los bosques mencionados.

El gobierno del BJP de la **India** intenta revertir sistemáticamente la aprobación de ciertos paquetes de derechos humanos y protecciones ambientales con la idea de fomentar inversiones en medio de la crisis del COVID-19. El sector minero ha sido un eje central de dicha reversión.

- **Borrador de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 2020.** El Ministerio del Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC) publicó un [borrador de la notificación de la EIA 2020](#) en marzo de 2020; el documento propone disminuir las audiencias públicas; debilita el proceso de consulta; condona las sanciones a proyectos que han cometido violaciones ambientales, y [exime a ciertas categorías de la industria de la obligación de la EIA](#). En total, 12 de las 14 cláusulas de la EIA de 2006 se modificaron en el nuevo borrador. Asimismo, se eximió de la obligación de obtener Autorización Ambiental (AA) a las minas que buscan expandir sus operaciones. Dichos cambios constituyen una desviación del fundamento estatutario de la *Environment (Protection) Act* [Ley (de Protección) del Medio Ambiente] de 1986 y [socavan los objetivos climáticos y de biodiversidad de la India](#). El borrador de la EIA de 2020 tendrá un impacto particular sobre la región noreste del país, donde habitan innumerables tribus protegidas por el Sexto Anexo de la Constitución de la India. El Artículo 371 y el Sexto Anexo otorgan a las comunidades propiedad sobre sus recursos naturales pero la disposición del borrador de la EIA de 2020 que permite el establecimiento de industrias dentro de los [100 km más cercanos a las fronteras internacionales sin previa consulta pública](#) afectaría desproporcionadamente a esas comunidades. El debilitamiento de las disposiciones de la EIA en el borrador de la versión de 2020 probablemente producirá graves impactos a largo plazo, puesto que limitan la supervisión y no abordan los riesgos socio ecológicos. Además, el polémico [proyecto hidroeléctrico Etalin de 3097 MW](#) no considera la actividad sísmica, los riesgos glaciares vinculados al cambio climático, los deslizamientos de tierra ni los impactos en las comunidades de un desastre natural relacionado con la represa. Finalmente, el borrador de la EIA de 2020 [promueve el desarrollo tecnocrático](#) en detrimento de los derechos humanos y el medio ambiente, preocupaciones que también han sido planteadas por los [Relatores Especiales de la ONU](#).

El régimen de Duterte en **Filipinas** se conoce por [silenciar a la oposición, por las ejecuciones extrajudiciales](#) y por tomar [medidas represivas contra disidentes](#).⁹ Un informe de Global Witness sobre las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente encontró que 43 de ellas fueron asesinadas, hecho que convierte a [Filipinas en el segundo país más letal para quienes luchaban por](#)

⁹ A/HRC/44/22.

[defender los derechos en 2019](#), después de Colombia.¹⁰ Cuando lo anterior se considera en conjunto y de cara al futuro, surgen serias preocupaciones.

- **La disidencia como terrorismo.** Durante la pandemia se aprobó el proyecto de Ley del Senado Núm. 1083 mientras que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Cámara Núm. 6875. Ambos se consolidaron para crear la Ley de la República 11479, o *Anti-Terrorism Act* [Ley Antiterrorismo] de 2020, que el presidente Duterte firmó el 18 de julio de ese mismo año, reemplazando la Human Security Act [Ley de Seguridad Humana] de 2007. Lo anterior se llevó a cabo a pesar de las críticas internacionales, incluso de la [ACNUDH](#). La Ley Antiterrorismo diluye las líneas entre el activismo legal, la disidencia y el terrorismo y fomenta [temores generalizados sobre la continuación y el aumento de los abusos de poder](#) por parte del gobierno de Duterte.¹¹
- **Criminalización de los pueblos indígenas.** En los meses previos a la pandemia se aprobó una ley muy cuestionada, misma que encontró gran resistencia. La [Orden Ejecutiva Núm. 70, aprobada en diciembre de 2018](#),¹² ha sido utilizada ampliamente durante la crisis sanitaria para silenciar a disidentes y criminalizar más a Defensores de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (IPHRD, por sus siglas en inglés). La Orden Ejecutiva Núm. 70 al enfocarse en el activismo y en el aumento de la militarización de los territorios de los PI, intensifica el uso de calificativos tales como izquierdistas y las amenazas que ya enfrentan las personas activistas.

Parte 2: Estímulo y compensación empresarial

Las pequeñas y medianas empresas a menudo dependen del apoyo del gobierno para sobrevivir a las crisis. Sin embargo, como respuesta al COVID-19, los gobiernos priorizan la expansión del sector extractivo y los proyectos de desarrollo a gran escala mediante disposiciones que determinarán el entorno económico durante muchos años por venir. Bajo el epígrafe de la renovación económica durante el COVID-19, los Estados han implementado una serie de estrategias favorables a los negocios, entre las cuales se llegan encontrar la desregulación y la simplificación de las licencias o de los incentivos fiscales. Los territorios de los PI y de las CL se encuentran en la mira de actividades económicas que contribuirán a la degradación ambiental y al cambio climático.

Indonesia ha remunerado a las empresas mediante renovaciones automáticas de licencias y ha eliminado los requisitos de certificación de legalidad de los productos. En algunas circunstancias, la movilización pública ha podido contrarrestar dichas acciones, pero se han aprobado varias

¹⁰ Filipinas fue el país más letal para para las personas defensoras de los derechos en 2018.

¹¹ A los PI y a las CL se les etiqueta e identifica como simpatizantes del comunismo, se les encarcela por defender sus hogares ancestrales contra proyectos extractivos y de infraestructura y se les impide llevar a cabo activismo. Muy probablemente se utilice la Ley Antiterrorismo de 2020 para sofocar la disidencia y cualquier crítica al gobierno, incluidas aquellas expresadas por los PI y las CL y sus organizaciones.

¹² El título completo de la OE Núm. 70 es '*Institutionalizing the Whole-of-Nation Approach in Attaining Inclusive and Sustainable Peace, Creating a National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and Directing the Adoption of a National Peace Framework*'.

disposiciones compensatorias con implicaciones a largo plazo para los bosques de Indonesia y para los PI y las CL que los habitan.

- **Extensión automática de las concesiones mineras de carbón.** La *Mineral and Coal Law (Minerba Law)* [Ley de Minerales y Carbón o Ley Minerba] se modificó sin participación pública. El artículo 47 [garantiza a las empresas mineras una prórroga de diez años, en dos ocasiones](#). Con ello, la nueva ley garantizará la extensión automática de las concesiones de minería de carbón y de esa forma, el dominio de la oligarquía de la industria del carbón por otros 20 años.
- **Renovación automática de licencias para plantaciones, concesiones madereras y de celulosa.** El Ministerio Agrario de Indonesia anunció la renovación automática de licencias hasta finales de 2020 para compensar a las empresas por las pérdidas relacionadas con el COVID.
- **Estímulo a la industria maderera ilegal.** El Ministerio de Comercio intentó revocar el requisito de legalidad para las exportaciones de madera. Indonesia fue la precursora del [Timber Legality Verification System \(SVLK\)](#) [Sistema de Verificación de la Legalidad de la Madera] en 2003 y la eliminación del requisito de legalidad tendría importantes consecuencias para la deforestación y el monitoreo de maderas taladas ilegalmente. Después de la eliminación de dicho requisito el 27 de mayo de 2020, aumentaron los temores de que la madera ilegal inundara el mercado,¹³ se intensificara la deforestación y disminuyera la seguridad territorial. Por esas razones, organizaciones de la sociedad civil (OSC), académicos, el sector privado e incluso el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura (MoEF) realizaron una exitosa campaña que logró restablecer el requisito de legalidad.

En lugar de fortalecer las disposiciones ambientales implementadas deficientemente, la **India** se encuentra en proceso de eliminar los protocolos que definen y evitan las violaciones. Más aun, tales acciones no incluyen ni contemplan adecuadamente la consulta a PI y CL para proyectos que afectan directa e indirectamente sus modos de vida tradicionales.

- **No hay disposiciones en las leyes ambientales de la India para autorizaciones con base en video.** La rápida aprobación de la AA para proyectos entraña riesgos en la supervisión administrativa.¹⁴ Entre el 24 de marzo y el 30 de junio, un [análisis](#) de las actas de las reuniones del Comité Asesor Forestal y del Comité de Evaluación de Expertos mostró que

¹³ El 40% de los productos de madera importados a Europa proviene de Indonesia.

¹⁴ El 27 de mayo se produjo una explosión seguida de un incendio en un pozo de petróleo perteneciente a Oil India Ltd (OIL) en Assam y 17 días el Proyecto Baghjan OIL recibió la AA de parte del MoEFCC. OIL presentó tres propuestas más para la exploración de petróleo y gas, cuyas AA se encuentran pendientes. Como todos los proyectos de exploración de petróleo y gas, en tierra y en alta mar, se incluyen en la categoría "B2" y están exentos de audiencias públicas, las propuestas de OIL no requieren someterse a tales audiencias. Debido a las repetidas inundaciones anuales a lo largo del río Brahmaputra y la proximidad de la explosión al río y a los ecosistemas vulnerables, el incidente implica graves riesgos para los PI y las CL, así como para la vida silvestre, tanto en la India como río abajo en Bangladesh. A finales de junio de 2020, esas mismas inundaciones obstaculizaron los esfuerzos por contener los incendios forestales, hecho que demuestra que las disposiciones de por sí débiles que permitieron la realización de proyectos como Baghjan OIL se deben fortalecer en lugar de debilitar o eliminar por completo. El Proyecto Baghjan OIL fue aprobado bajo la EIA de 2006, lo cual comprueba la necesidad de fortalecer las disposiciones de dicho documento y no desvirtuarlas, como lo hace el Borrador de la versión de 2020.

unos 120 proyectos se recomendaron, 90 se aplazaron, 30 se devolvieron y 2 se rechazaron. Las reuniones se llevaron a cabo por videoconferencia debido a las restricciones del confinamiento. Una cuarta parte de los proyectos recomendados quedaron dentro de los [distritos de Fifth Schedule \[Quinta Lista\] y fueron aprobados](#) sin la debida diligencia ni respeto por los derechos consagrados en la *Forest Rights Act* [Ley de Derechos Forestales] (FRA) y sin considerar el derecho de CLPI. En total, [30 proyectos aprobados por el MoEFCC se encuentran en áreas vulnerables de biodiversidad](#).

- **Comercialización del sector de minería del carbón.** El 11 de junio de 2020, el gobierno de la India lanzó una nueva iniciativa para el sector del carbón, bajo el lema "[Liberando al carbón: Nuevas esperanzas para Atmanirbhar Bharat](#)", que cubre [41 minas de carbón en cinco estados](#). Dicha medida fue acompañada de otra legislación, incluida la enmienda a la Sección 8A de la *Mines and Minerals (Regulation and Development) Act* [Ley de (Regulación y Desarrollo de) Minas y Minerales] de 1956, la cual extenderá automáticamente todas las aprobaciones, licencias y derechos válidos a la adjudicataria de contratos de arrendamiento minero. Dichas aprobaciones tampoco quedaron sujetas a la obligación de obtener la autorización estipulada en la *Forest Conservation Act* [Ley de Conservación Forestal] de 1980 y en la FRA de 2006, por un período de dos años. Una enmienda a la *Coal Mine (Special Provisions) Act* [Ley de (Disposiciones Especiales para) Minas de Carbón de 2015 permite por primera vez que empresas privadas lleven a cabo operaciones de la industria del carbón. Esas reformas radicales del sector minero de la India, en particular la extracción del carbón, representan una medida sin precedentes que complicará aún más la implementación de las reformas de tenencia forestal introducidas por la FRA de 2006. Esas minas de carbón también se encuentran ubicadas en [tierras indígenas e importantes bosques biodiversos](#).
- **Eliminación de protecciones laborales.** En un esfuerzo por aliviar la situación de las empresas, los estados de la India y el gobierno central han iniciado el sistemático [desmantelamiento de los derechos de los trabajadores](#) con el propósito de fomentar el crecimiento económico. Esas reformas radicales debilitarán las protecciones relacionadas con las horas laborales, los salarios, las horas extra y la salud y seguridad ocupacional, entre otras cuestiones. Con ello, la India depositará la carga financiera de la recuperación económica en las poblaciones más vulnerables del país —a menudo los grupos más afectados durante el cierre impuesto por el gobierno—.
- **Apertura de tierras agrícolas para la industria.** El estado de Assam aprobó una ordenanza sobre Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que aliviará la situación para los negocios al eliminar la necesidad de [permisos, autorizaciones o licencias](#) para la realización de actividades industriales en tierras agrícolas. Asimismo, el gobierno central de la India contempla la posibilidad de crear una Corporación Nacional de Gestión de la Tierra para [facilitar la monetización de las tierras](#) descritas como "baldías" en el papel, pero que en la práctica las comunidades manejan de manera consuetudinaria. Lo anterior llevará a conflictos sobre la tierra, desplazamientos, a la alteración de modos de vida y a la criminalización de personas vulnerables sin tenencia segura sobre sus tierras y recursos. El gobernador de Karnataka promulgó la *Karnataka Land Reforms (Amendment) Ordinance* [Ordenanza (Enmienda) de Reformas Agrarias de Karnataka] de 2020, que modificará la

Karnataka Land Reforms Act [Ley de Reformas Agrarias de Karnataka] de 1961¹⁵ y con ello se abren las tierras agrícolas a entidades no dedicadas a la agricultura y se modifican los límites máximos de tierra. Las asociaciones de agricultores han protestado en contra de la medida porque allana el camino para [adquisiciones de tierras a gran escala](#) que favorecerán a los actores no estatales más grandes y poderosos.

Después de la ECQ y con renovados poderes ejecutivos, **Filipinas** ha sido testigo de la apropiación de fondos asignados a otros poderes del gobierno para impulsar planes de infraestructura en tierras ancestrales. Por lo tanto, esos sectores pueden continuar con sus actividades con la posibilidad de facilitar la propagación del COVID-19 a áreas rurales remotas.

- **La infraestructura como “curita” para la pandemia.** [El 4 de junio de 2020](#), el gobierno aprobó el Proyecto de Ley Núm. 6815 de la Cámara de Representantes, *Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy of the Philippines* (ARISE Philippines) [Recuperación Acelerada y Estímulo a la Inversión para la Economía de las Filipinas], que constituye un paquete de estímulos por US\$ 2600 millones. Alrededor del 50% de los fondos se han destinado a proyectos de infraestructura para [resucitar la economía](#). Sin embargo, desde entonces, el presupuesto se redujo drásticamente a US\$ 340 millones y convirtió así el estímulo fiscal de Filipinas en uno de los [más pequeños del mundo](#). Varios de los proyectos de infraestructura que recibirán el estímulo se encuentran en [tierras ancestrales de PI y de CL](#) y se les cuestiona enormemente.¹⁶ La iniciativa aún no se convierte en ley.
- **Proyecto de desarrollo orientado al mercado apunta a tierras ancestrales.** “*Build Build Build*” (BBB) [Construye, Construye, Construye], el programa insignia del Plan de Desarrollo de Filipinas (PDP) 2017-2022, se revitalizó en el contexto de la pandemia para promover la [“edad de oro”](#) de la infraestructura. Hay más de 100 proyectos dentro del BBB, muchos de los cuales se ubican en territorios ancestrales de los PI y de las CL. Más de 110 mil habitantes indígenas de al menos 106 aldeas podrían verse afectados por cinco proyectos de represas propuestos; existen además otras 230 solicitudes aprobadas de compañías mineras que invadirían por lo menos 542 mil 245 hectáreas de tierras ancestrales.¹⁷ Duterte utiliza las facultades ejecutivas otorgadas por la **Ley Bayanihan (ampliados en la Ley Bayanihan 2)** para desviar y apropiarse de fondos de otros poderes del gobierno con base en la Ley del Senado Núm. 1474 para priorizar préstamos a proyectos de infraestructura dentro del BBB. Para el año fiscal 2021, la asignación ascenderá a US\$ 1.3 mil millones.

Parte 3: “Soluciones” pandémicas que desvirtúan los derechos de los PI y de las CL

¹⁵ La enmienda —promulgada el 13 de julio de 2020— elimina las Secciones 79A, 79B y 79C de la Ley y que imponen [severas restricciones a la propiedad de tierras agrícolas](#).

¹⁶ Consulte la nota al pie anterior. Información proporcionada por *Cordillera Peoples Alliance*.

¹⁷ Información proporcionada por *Cordillera Peoples Alliance*.

Una [pandemia prolongada](#) aumenta los riesgos de una crisis alimentaria. Los confinamientos han afectado en gran manera la capacidad de las comunidades para obtener productos alimenticios y acceder a servicios básicos y de salud. **Las "soluciones" que desvirtúan los derechos de los PI y de las CL ejercen más presión sobre esos grupos poblacionales y sobre su capacidad para recolectar, cosechar, cultivar y distribuir alimentos.**

- **Restricción de acceso a los bosques.** En un aviso oficial del 6 de abril de 2020, el MoEFCC de la **India** giró instrucciones a todos los estados y territorios de la unión para garantizar una reducción de las interacciones humanas con la vida silvestre mediante la restricción de movimiento de personas en los Parques Nacionales, Santuarios y Reservas de Tigres. Los PI y las CL dependen en gran medida de los productos forestales no maderables (PFNM) para su subsistencia y las restricciones afectarían de manera inmediata de [3 a 4 millones de personas que viven en las áreas protegidas y sus alrededores](#). Cuando se limita el acceso de las comunidades rurales a los recursos forestales que les proporcionan alimentos y medicinas, se elimina un sustento vital. Los cierres también han coincidido con la temporada de cosecha [y por lo tanto, perjudican la supervivencia de unos 275 millones de personas](#) en todo el país.
- **Plantaciones de arroz en tierras en disputa.** El presidente Joko Widodo ha girado instrucciones a las empresas estatales para que abran nuevos campos de arroz en [900 mil hectáreas de Kalimantan Central](#), en Indonesia. Muchas de las áreas propuestas son tierras agrícolas tradicionales de los PI y de las CL, así como importantes turberas. Probablemente dicho programa gubernamental ocasionará más conflictos agrarios y acaparamiento de tierras si no se realiza por y para el pueblo y puede traer graves consecuencias para la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Indonesia en virtud del Acuerdo de París.
- **Utilización de las tierras de los PI y de las CL para la producción de alimentos.** El Departamento de Agricultura y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de **Filipinas** han publicado una propuesta conjunta para aumentar la producción de alimentos en las llamadas tierras ancestrales "[inactivas](#)" de los PI y las CL. El programa "*Plant Plant Plant*" (PPP) [Planta, Planta, Planta] se le ha tildado de vehículo para abrir tierras ancestrales a la agricultura industrial y al acaparamiento de tierras. [Esas tierras no se encuentran inactivas](#) y el PPP obstaculizará la acción colectiva y las prácticas consuetudinarias de los PI y de las CL que promueven el uso sostenible de los recursos naturales.

Conclusión

Las vulnerabilidades de los PI y de las CL se han agravado por la pandemia del COVID-19. Se han intensificado la criminalización, la corrupción, las amenazas, la violencia de género, las industrias extractivas, la inacción del Estado y el acceso limitado a información apropiada desde el punto de vista cultural. Sin embargo, dichos grupos poblacionales siguen respondiendo con [resiliencia y éxito comunitario](#). La base de tal éxito son las acciones autodeterminadas, los sistemas de gobernanza tradicionales y la seguridad de los derechos de tenencia colectiva sobre las tierras y los recursos.

La solidaridad entre las organizaciones que representan a los PI y a las CL ha sido la piedra angular de esa respuesta. En toda Indonesia, por ejemplo, las comunidades comenzaron desde marzo a prepararse para una crisis alimentaria, siguiendo los principios de [wilayah bermartabat](#) (un territorio digno). La solidaridad entre áreas rurales y urbanas se puso en marcha mediante el [Movimiento de Solidaridad de Graneros Agrícolas](#) del Consorcio para la Reforma Agraria (KPA), mediante el cual los agricultores y pescadores con excedentes donan y venden sus productos a bajo costo entre los trabajadores urbanos. Ese ejemplo también destaca la importancia de la tenencia comunitaria de la tierra: la mayoría de los productos respaldados por KPA fueron cultivados en tierras en disputa.

Las comunidades también han aprovechado sus derechos sobre la tierra para responder a la crisis. Poblados en la **India**, como Kukdale en el [distrito de Gadchiroli de Maharashtra](#), han aprovechado su independencia económica con el apoyo de *Community Forest Resource Rights* para brindar ayuda a las familias más vulnerables con suministros semanales. En Riau, una provincia de la isla de Sumatra en **Indonesia**, los jóvenes de Talang Mamak [contribuyen a la seguridad alimentaria de sus aldeas y promueven el monitoreo comunitario](#). Esos dos ejemplos se repiten múltiples veces entre cientos de miles de PI y CL que se han organizado para garantizar la salud, la seguridad y los modos de vida de los miembros de sus comunidades.

Es fundamental que legisladores y líderes del mundo posterior al COVID se inspiren en dichas acciones al formular sus respuestas económicas. Los derechos y la autodeterminación de los PI y de las CL deben encontrarse en [primer plano en los paquetes de estímulos](#) para proteger a la naturaleza y evitar el riesgo de futuras pandemias. Ningún resurgimiento económico puede sostenerse si se compromete el espacio democrático de las comunidades más capaces de salvaguardar los recursos del planeta.

Sobre la Iniciativa para los Derechos y Recursos

La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) es una coalición mundial de más de 150 organizaciones dedicadas a promover los derechos sobre tierras forestales y recursos de pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y las mujeres que viven en esos grupos. Los integrantes de RRI aprovechan su mutua fortaleza, experiencia y cobertura geográfica para obtener soluciones de manera más eficaz y eficiente. RRI refuerza el poder de su Coalición mundial para amplificar las voces de los pueblos locales y lograr proactivamente la participación de gobiernos, instituciones multilaterales y actores del sector privado en la adopción de reformas institucionales y de mercado que apoyen la realización de los derechos. Mediante la promoción de una comprensión estratégica de las amenazas y oportunidades globales derivadas de la inseguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos, RRI desarrolla y promueve enfoques de derechos para el ámbito empresarial y el desarrollo y cataliza soluciones efectivas para ampliar la reforma de la tenencia rural y mejorar la gobernanza sostenible de los recursos.

RRI opera bajo la coordinación del Grupo para los Derechos y Recursos (Rights and Resources Group) organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. Para más información, favor de visitar: rightsandresources.org/es/.

Socios



Patrocinadores



Las opiniones aquí presentadas no necesariamente las comparten las agencias que generosamente apoyaron este trabajo. Este escrito se realizó bajo Creative Commons License, Atribución Creativa CC BY 4.0.